

“UNA MIRADA DESDE EUROPA”

(Transcripción¹)

WALTHER BERNECKER: Muchísimas gracias. En primer lugar, agradezco muy cordialmente la invitación a la Fundación Manuel Giménez Abad y a la Fundación Konrad Adenauer por haberme invitado a participar aquí. Los estimados colegas ya han dicho algunas de las cosas que voy a decir. Trataré de presentar una visión desde fuera, pero también tengo que decir que me ocupó mucho de la historia y de la actualidad española, y eso por medios españoles, naturalmente. Entonces, mi visión está muy influenciada también por la visión de dentro, así que será una mezcla, quizá, desde fuera y desde dentro.

En estas jornadas sobre la necesaria reivindicación de las instituciones, a mí me toca presentar una mirada desde Europa, es decir, desde el exterior. Trataré de cumplir con mi cometido, considerando la voz institución, según lo han formulado los organizadores de este encuentro, en una comprensión amplia, que no se limita al funcionamiento de las instituciones formales del Estado, sino que abarca también partidos o sindicatos, la educación o medios de comunicación.

En cuanto a la mirada exterior, me limitaré a la mirada desde Alemania. Una concentración de miras doblemente justificada. Por un lado, porque estas jornadas surgen de una colaboración hispano-alemana, y por otro, porque la crisis económico-financiera que está en el fondo de la crisis institucional y política española tiene que ver mucho, en la percepción de una mayoría de españoles, con Alemania.

En cuanto a la conveniencia de ocuparse de las instituciones como engranaje necesario para que funcione todo el sistema, conviene recordar las palabras de uno de los padres fundadores de la Comunidad Europea, el francés Jean Monnet, quien en el debate integracionista de la Comunidad Europea dijo una vez, a principios de los años 60: “Nada es posible sin el hombre, pero nada es duradero sin las instituciones”. Son hombres los que dan vida a las instituciones, pero son las

¹ Corresponde a la transcripción literal de la intervención de Walther Bernecker, Catedrático de Estudios Internacionales de la Universidad de Erlangen-Nürnberg, en las Jornadas *La necesaria reivindicación de las instituciones* celebradas los días 28 y 29 de mayo de 2013.

instituciones las que perduran y que dan necesaria estabilidad a un sistema para que éste pueda sobrevivir. Por eso está muy acertado el título de estas jornadas, y acertada es también la expresión de Jean Monnet al relacionar a los hombres con las instituciones.

Mirando desde fuera, sobre la crisis en España son varios los aspectos en los que se refleja ejemplarmente la variante española de la generalizada crisis sureuropea. En primer lugar, de manera especialmente llamativa, la falta de funcionamiento del mercado laboral, el desproporcional aumento de los parados, el factor más llamativo de la crisis, es al mismo tiempo, el fenómeno sobre el cual divergen las miradas española y alemana de manera drástica.

Mientras que una mayoría de españoles atribuye el alto paro a las políticas de austeridad y recortes impuestas por Bruselas, que sigue las directivas alemanas, gran parte de los alemanes opina que el elevado desempleo es consecuencia de no haber realizado sistemáticamente las reformas estructurales necesarias en el sistema económico, financiero y laboral. Ningún otro aspecto de la crisis recibe una interpretación más dispar que el análisis de las causas del alto desempleo. Volveré sobre este punto.

Un segundo aspecto que llama enormemente la atención desde una perspectiva europea es el aparente incremento de la corrupción y la intensificación de la persecución judicial de este fenómeno. Es llamativo que un fenómeno tan secular como la corrupción salte a las primeras páginas de los medios de comunicación y se mantenga allá por años, justamente en la fase de la mayor crisis económica, institucional y de valores, vivida por España en décadas. ¿Qué relación hay entre corrupción, la creciente falta de aceptación del fenómeno de la corrupción en la sociedad y la crisis? También volveré sobre este punto.

Un tercer aspecto, por cierto, íntimamente ligado al segundo, el de la corrupción, es la crisis por la que pasa la figura institucional del Rey. Aparentemente, se ha roto el viejo idilio que la sociedad española ha mantenido durante décadas con su Rey. Ciertos comportamientos del monarca mismo y de algún miembro de la casa real, la sociedad ya no los interpreta como una equivocación o un error personal susceptible de ser perdonado, sino que se empieza a cuestionar la institución misma de la monarquía, o por lo menos se reflexiona si la estabilidad de la monarquía en España

no demanda probablemente un relevo relativamente rápido en la persona del príncipe de Asturias. ¿Es casual que este cambio de sintonía entre la sociedad y el Jefe de Estado tenga lugar en esta época de crisis?

El cuarto y último aspecto que quisiera resaltar de las diferentes crisis institucionales es la aparente y creciente desafección de una considerable parte de los ciudadanos catalanes hacia el Estado español. A corto plazo, podría ser la crisis más peligrosa para el futuro del Estado español en su forma tradicional.

La crisis española tiene indudablemente muchas más facetas, pero me concentraré en estas cuatro, que son, para un analista extranjero, las más llamativas y que más se comentan en la prensa alemana. Por motivo de tiempo, solo puedo esbozar muy resumidamente estos cuatro aspectos.

Primero, las causas de la crisis y el mercado laboral. Los observadores extranjeros se quedaron atónitos al observar que, en menos de cuatro años, de 2008 a 2012, España pasó de ser uno de los países de mayor crecimiento de la Unión Europea a sufrir una profunda depresión nacional, con una reducción de su riqueza que amenaza con llevar a una década de depresión.

El país transitó de la euforia, a una intensa crisis económica y social. Es obvio que, dentro y fuera del país, se haya formulado la pregunta: ¿Cómo se ha podido llegar a este punto? La rapidez con la que se asumió esta crisis era un fenómeno histórico, se tradujo en España con el brusco despertar de un sueño de prosperidad que había durado unos 15 años. Desde una perspectiva superficial, España creció entre 1996 y 2008 a un ritmo de vértigo, a un promedio de 3,8% anual, cuando la Europa de los 15 avanzaba a una media de solo 2,5%.

Fabricó, en 10 años, 8 millones de empleos, casi el 30% de todo el trabajo que se creó en la Unión Europea. Pero sus empresas se endeudaron hasta las cejas. Una lluvia de crédito barato y procedente de banca extranjera permitió una expansión económica sin parangón, si bien con un expediente en productividad lamentable. Esta creció entre 1996 y 2007 solo un 0,5% anual, frente al 1,3% que lo hacía en la Unión Europea.

Hoy, aquella etapa apacible se revela como una época de excesos y de desequilibrios, origen de muchos de los males actuales. En el fondo fue una fase de crecimiento económico ficticio, ya que el crecimiento hay que medirlo por el aumento del producto interior bruto por habitante, y como España en esos años aumentó su población gracias a una inmigración de dimensiones desconocidas en su historia, muy por encima de los demás países del mundo occidental, el crecimiento del PIB ponderado por el aumento de sus habitantes superó, por muy poco, al crecimiento de la Unión Europea de los 15 en la primera parte del período, para quedar por debajo ya en 2004, y de forma permanente a partir de 2006.

Además, hay que considerar otro aspecto. Si a partir de 1996 hubo en España un exceso de crecimiento relativo del PIB sobre el de la Unión Europea, hay que considerar la enorme ayuda económica recibida por España desde Bruselas, que ascendía a cerca del 1% anual del PIB entre 1996 y 2006. Indudablemente se trataba de una impresionante operación de solidaridad, pero que no contribuyó a elevar la productividad relativa y hacer más competitiva la economía española. Más bien se invirtió demasiado en infraestructuras que, por lo menos en parte, fue inútil.

Al mismo tiempo, la productividad española se deterioró en comparación con la de la Unión Europea hasta el 2005. Solo el comienzo de la crisis y la enorme destrucción de empleo permitieron recuperar hasta 2009 el nivel relativo del año 1996, lo que se debía, en primer lugar, a que la productividad empezó a deteriorarse también en los restantes países de la Unión Europea.

Aunque al comienzo de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, en abril de 2008, España seguía creciendo, los síntomas de que el modelo productivo se estaba agotando ya eran claramente perceptibles. A pesar de algunas reformas económicas, seguían perdurando muchos rasgos de una economía poco dinámica, desde la ausencia de una clase empresarial verdaderamente emprendedora hasta un mercado laboral anquilosado, pasando por la ausencia de verdadera competencia en muchos mercados de productos y servicios.

Al comienzo de la segunda legislatura de Zapatero, la economía española ya dejaba vislumbrar serios desequilibrios. Los mayores problemas eran una excesiva concentración sectorial, ante todo en torno a la construcción y el sector inmobiliario, un enorme endeudamiento privado, alcanzando en 2009 el 64,4% del PIB español,

una altísima dependencia de capital exterior para financiar este endeudamiento, canalizado a través de la banca, y unas pobres tasas de productividad responsables de la falta de competitividad de muchos sectores.

El colapso financiero global pinchó la burbuja inmobiliaria española y disparó el desempleo a gran velocidad. El superávit público que España había logrado alcanzar antes de la crisis se esfumó rápidamente, y se convirtió en 2009 en un elevado déficit público de más del 11%. Este aumento del déficit fue el resultado de la menor recaudación fiscal y del mayor gasto público, vinculado ante todo a las prestaciones por desempleo y de los programas de estímulo fiscal discrecional que el Gobierno de Zapatero puso en marcha.

Es decir, hay que resaltar que España no era derrochadora desde un punto de vista fiscal. En los albores de la crisis tenía una deuda baja y superávit presupuestario, pero también tenía una enorme burbuja inmobiliaria. Cuando la burbuja estalló, la economía española fue abandonada a su suerte. Los problemas fiscales españoles son, pues, una consecuencia de su depresión, y no su causa, algo que se reconoce en la prensa económica alemana.

Desde que estalló la crisis, hay en Europa una clara diferencia entre países acreedores y deudores. Entre los acreedores, Alemania tiene la hegemonía. Los deudores tienen que pagar elevadas primas de riesgo por financiar su deuda pública, y eso repercute en sus costes de endeudamiento. Además, la Bundesbank alemana insistió en su doctrina monetaria surgida de la traumática experiencia de Alemania con la inflación, considerando que esta es la única amenaza de la estabilidad, e ignorando la deflación, que para muchos otros analistas —por ejemplo, George Soros, entre otros— es el verdadero peligro económico.

Alemania y Bruselas insisten en imponer austeridad a los países endeudados, que puede ser contraproducente porque la reducción del PIB hace que aumente la ratio de endeudamiento. En la mayor parte de los países europeos, y muy concretamente en España, se empezó a practicar una política de recortes drásticos del gasto público y de reducción de los derechos laborales. Esta política puso en cuestión una de las señas centrales de identidad de la concepción europea: la prosperidad económica y el modelo social. Europa vivía el peligro de un retroceso democrático,

asumiendo cada vez más Gobiernos tecnócratas, no legitimados democráticamente, y un sistemático debilitamiento del modelo social europeo.

En cuanto a las consecuencias sociales de la crisis, el actual Gobierno de Mariano Rajoy empeoró drásticamente la, ya de por sí, pésima herencia económica recibida del Ejecutivo socialista. Las políticas de austeridad y recortes sociales hicieron aumentar más aun el número de parados, la educación pública empeoró, igual que el servicio médico, los funcionarios perdieron una paga extraordinaria, los impuestos subieron, los derechos laborales de los trabajadores fueron restringidos, el despido se hizo más barato.

La reacción de la sociedad española ante esta reducción del estado de bienestar fue muy clara, y lo hemos oído muy claramente esta tarde: Deshizo sus vínculos afectivos con los partidos políticos y trituró en gran medida el crédito que le merecían las instituciones y los organismos públicos. El porcentaje de ciudadanos que pensaba que el actual sistema democrático seguía siendo, con todas sus insuficiencias, el mejor que había tenido España en su historia, cayó drásticamente. Hace un año rondaba solo el 50% de la población. Igualmente, creció la desafección hacia muchas instituciones políticas. Por ejemplo, como lo acabamos de oír, hacia los partidos políticos y los políticos mismos.

Hoy, el modelo institucional y político que se sustenta o se sustentaba sobre dos partidos hegemónicos que alternan en el poder con distintas mayorías está en cuestión y amenazado. El desgaste del PP y del PSOE, acelerado por la crisis económica, esboza un panorama político fragmentado, que obligaría hoy a pactos entre partidos nacionales. Si se consolidara el actual clima social, España estaría a puertas de un nuevo modelo político, o quizá recuperaría el modelo del inicio de la democracia, cuando cuatro partidos, la UCD, el PSOE, el PCE y la Alianza Popular se repartieron la mayoría del Congreso.

Posteriormente, esa distribución pasó al bipartidismo, favorecido también por la ley electoral. Cuando alguno de los dos partidos no alcanzaba la mayoría absoluta, la aritmética se completaba con los votos de los nacionalistas. Lo que se observa desde fuera es que, año y medio después de haber obtenido el PP la mayoría absoluta en el Parlamento, el clima político español se caracteriza por un profundo y extenso desapego ciudadano respecto de las instituciones y de la vida pública. Pero

no se trata de desafección respecto de la democracia en sí, o respecto del actual sistema, sino del modo inadecuado en que una y otro llevan ya demasiado tiempo funcionando en la sociedad.

La extendida y severa crítica ciudadana va dirigida fundamentalmente a los partidos y representantes políticos, es decir, a los protagonistas de la vida política, y no tanto al andamiaje político institucional. Pero este, con otro entendimiento de la política y más sensibilidad hacia las demandas sociales, cambiaría. Contemplando la vida política española desde el exterior, uno se pregunta por qué en la política nacional española no existe la institución de la coalición entre partidos, lo que disminuiría automáticamente la arrogancia y el autismo de los partidos y sus líderes, porque estos no están en condiciones de concluir pactos de Estado y de consenso en cuestiones esenciales del país.

Si la crítica ciudadana va dirigida ante todo a los partidos, entonces es de esperar que la institución del Partido Socialista en la oposición sea víctima de la desafección mencionada. Así es, el 87% de apoyo entre los votantes del PSOE da idea clara de la dicotomía entre la institucionalidad de los socialistas y la petición de sus bases, que se sienten más cómodas en la protesta por la crisis y en la simpatía por el movimiento 15-M, de los indignados. El reto para el futuro candidato socialista será, pues, la recuperación de ese liderazgo social que de momento ha perdido en favor de movimientos sociales espontáneos.

Segundo ejemplo: la corrupción. De los muchos ejemplos de corrupción que se podrían aducir, me limito a unas pocas cifras. Por encargo del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, los servicios de inspección de dicha entidad han elaborado recientemente un estudio que arroja un primer balance, según el cual los juzgados y tribunales españoles tramitan en la actualidad más de 2.100 causas de especial complejidad, de las que 1.661 son causas de corrupción política o financiera, en concreto delitos de prevaricación, de cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental o delitos contra el patrimonio histórico.

El elevadísimo número de causas de corrupción que se encuentran actualmente en los tribunales, muchas de las cuales son atribuibles a políticos locales o regionales,

explican la desafección de muchos ciudadanos frente a la política y los políticos. Lo que antes quizá se toleraba, ahora, en tiempos de una profunda crisis, con muchos problemas para cada uno, ya no es tolerable.

Más problemática aun que el fenómeno de la corrupción es la reacción de la política. Preguntado el ministro de Asuntos Exteriores, Margallo, acerca de la posible involucración de la infanta Cristina en los turbios negocios de su marido, respondió que deseaba un rápido fin del asunto, y lo cito: “Pues no ayuda a la “Marca España””. Anotemos: en ojos de la élite funcional de este país, el bien que debe ser protegido no es el estado de Derecho, la Constitución o la transparencia en política, sino la marca España.

Resulta difícil no ver en esta reacción una muestra de la cultura política del país, un país que prácticamente no conoce la dimisión o la autocrítica, donde los políticos están fijados en apariencias. La consecuencia de este comportamiento es una desafección generalizada a las instituciones. Según Metroscopia, el instituto de José Pablo Ferrándiz, en una escala 100, suspenden el Rey, y no digo los puntos negativos, el Parlamento, la Iglesia, los obispos, el Gobierno, los bancos y los partidos políticos.

En tercer lugar, la crisis de la monarquía. No hay duda de que en los últimos años la figura institucional del Rey ha sufrido un fuerte desgaste. Hay varios motivos para esto. Por un lado, la situación procesal de la infanta Cristina, situación judicial todavía no aclarada definitivamente. Por otro, el comportamiento poco ejemplar del marido de la infanta, que ha hecho necesario apartarlo de la familia real.

A esto vino a sumarse el desafortunado viaje del Rey a África y las declaraciones poco oportunas de la acompañante del Rey —alemana, por cierto—, todo esto ampliamente discutido en la prensa alemana. No es casual que todas estas actividades se relacionen en medio de la crisis que sufre el país, con la cuestión del presupuesto público de la casa del Rey y su sometimiento a los principios de transparencia y publicidad. Más que antes, se llama la atención sobre el simple hecho de que la Casa del Rey es una institución y una Administración del Estado sostenida por presupuesto público. El patrón que había permitido diseñar el armazón de la monarquía y el estilo que impuso su titular dan pruebas evidentes de fatiga.

Para entender el desgaste que ha sufrido la figura del Rey hay que tener en cuenta también que España ya no es la misma que se dejó acompañar y llevar por un Rey que aceptó sin reservas la Constitución del año 1978, y que, en la noche del 23 de febrero de 1981, se ganó el respeto de la sociedad civil. Lo que entonces se valoró como gestos que merecían reconocimiento, por resultar audaces, hoy son actos de normalidad democrática, y para la mayoría de españoles parte de la memoria y de los archivos de la historia reciente.

Los éxitos del pasado nadie los discute, pero el crédito acumulado entonces no es suficiente para conducir un presente bien diferente. La España de hoy, con sus estructuras democráticas consolidadas, se asienta sobre una sociedad crítica que exige instituciones honorables que se legitimen por el ejercicio responsable de sus competencias.

Finalmente, en cuarto lugar, el deterioro del sistema democrático. Las encuestas recientes son una voz de alarma que advierte y del peligro de derivar hacia situaciones impredecibles. Crece la impresión de soberanía democrática arrebatada. En Cataluña, el fracaso del estatuto renovado y la crisis económica insuflaron energía al independentismo. En círculos independentistas rápidamente se extendió una campaña de insumisión, por ejemplo, para no pagar peaje en las autopistas catalanas.

El sentimiento independentista, que diferentes estudios situaban en torno al 25% en la década de los 90, creció con los Gobiernos de Aznar, se consolidó con los de Rodríguez Zapatero, y no pudo ser frenado por el Gobierno de Rajoy. Hoy roza el 44%, según la última encuesta de la Generalitat. La crisis financiera se convirtió en el principal motor del soberanismo.

El Gobierno de Artur Mas y sus medios de comunicación afines, relacionaban permanentemente los recortes sociales, con el maltrato que sufría la Generalitat al no tener un sistema de financiación, como el del País Vasco o Navarra. Las estanterías de las librerías se llenaron de ensayos políticos, con una eclosión de títulos que analizan el salto al independentismo.

En lo que respecta al estado de las comunidades autónomas, fue una solución válida para la España de la Transición, pero desde el principio faltó articulación, y se

sucedieron conflictos verticales. En pocos años se plantearon ante el Tribunal Constitucional 10 veces más conflictos de competencias que en cuatro décadas en la República Federal de Alemania. Hoy la cuestión de fondo es si el Estado español soportará una crisis que acentúa las tensiones entre centro y periferia.

Existe un antecedente próximo: la disolución de la URSS, en la cual el desplome económico jugó un papel determinante. La fragmentación de Europa desde la caída del muro de Berlín contribuyó, por ejemplo, a la radicalización del PNV, y ahora despunta una expectativa aún más influyente: el referéndum de Escocia por su independencia. Nacionalistas catalanes y vascos piensan que, si la secesión escocesa triunfa, nada deberá oponerse a sus propósitos. Además, la evolución económica de la crisis revestirá una importancia decisiva. De persistir y agudizarse la crisis y la tensión, el independentismo puede muy bien constituirse en expresión del malestar social.

Llego a unas observaciones finales. Seguramente habrá que remontarse a algunos momentos clave de la Transición española o de los primeros años de la democracia para encontrar una sensación similar a la de hoy, de incertidumbre acerca del futuro. No se trata solo de la mala coyuntura económica, que en absoluto constituye una novedad. En los años 80, coincidiendo con las reformas estructurales que precedieron y siguieron a la adhesión a la Unión Europea, y posteriormente en los años 90, en paralelo a la crisis que siguió a la unificación alemana y a la devaluación de la peseta, los españoles aprendieron a convivir con crisis de empleo y crecimiento.

La diferencia no reside en la crisis, sino en su contexto nacional y europeo, pues, al contrario que ahora, aquellas reformas y ajustes estaban claramente enmarcados en un contexto europeo propicio, sostenidos en una secuencia de acontecimientos comprensible para la ciudadanía y orientados hacia un futuro claro e ilusionante.

Si la adhesión a la Unión Europea selló la transición democrática y la normalización internacional de España, la noticia de que el país accediera a la unión monetaria junto con el grupo de países más avanzados del entorno europeo elevó la frágil autoestima española hasta tales extremos que algunos incluso se permitieron jugar con las fechas 1899-1998 para hablar del cierre de un ciclo de decadencia y de fracaso, y la apertura de un horizonte radicalmente distinto.

Debido a ello, incluso en los peores momentos de dichas crisis, España mantuvo un sentido de dirección comprensible y un horizonte de salida claro e incluso ambicioso. Todo ello contribuyó a consolidar entre la ciudadanía una cultura de reformas, es decir, el convencimiento de que las reformas permitían ganar un futuro mejor para todos.

Nada de eso ocurre ahora, cuando la pérdida de confianza interior y exterior y la falta de un horizonte nacional y europeo son las principales características de la crisis. Quizá por esa razón esta sea la primera crisis en la que muchos españoles no piensen en un futuro mejor, sino simplemente en recuperar su pasado inmediato y los niveles de vida que ya han conocido, lo que marca una importante distancia psicológica con respecto a otros momentos de la vida política española.

Internamente, la crisis ha expuesto a un país recorrido por múltiples grietas. Al desbocamiento del paro y el estancamiento económico hay que añadir las sombras que, una tras otra, han ido alcanzando a las principales instituciones del país: la monarquía, los partidos políticos, el Poder Judicial, el Banco de España, las comunidades autónomas, los entes locales, el sistema financiero. Da la impresión de que ninguna de estas instituciones clave, ha escapado del desgaste y de la pérdida de confianza ciudadana.

La crisis actual ha dado al traste con la confianza depositada en España en los ámbitos internacionales alcanzada durante el último ciclo expansivo. Tras la entrada en la Comunidad Europea y los éxitos conseguidos para cumplir con los criterios de convergencia y formar parte de la unión monetaria desde su creación, España pasó de ser un país de segundo nivel a estar bien considerada en Europa. En aquellos momentos se redujo la prima de riesgo y los capitales extranjeros comenzaron a invertir dinero en España.

Pero la crisis financiera internacional y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria devolvieron a España al *status quo ante*. El intenso crecimiento de la economía española, basado en la construcción en los años del bum, no había sido aprovechado para poner las bases de un crecimiento estable. La financiación fácil y barata cegó tanto a instituciones como a empresas y familias, que gastaron más de lo que era razonable en relación con su capacidad de producción y sus rentas.

La crisis económica ha provocado, pues, no solo una crisis política, sino una crisis de la política, a la que también han contribuido los múltiples casos de corrupción. Según Fernando Vallespín, los ciudadanos no ven a los políticos como capaces de resolver sus problemas, sino como un problema más, y esto suscita inevitablemente la cuestión de la deslegitimación del sistema, y abre las puertas de la aparición de discursos populistas en la derecha y la izquierda, pero a ello se suma en estos momentos la falta de liderazgo para dirigir a la sociedad en esta crisis, ya lo ha dicho José Pablo Ferrándiz.

Hay, pues, una desafección a la política y un rechazo a los políticos como clase que llevó y lleva a protestas multitudinarias, a acampadas en la calle y el movimiento de los indignados. Por otro lado, la crisis de liderazgo en España se enmarca en una crisis de liderazgo en Europa, y ésta, en la sensación generalizada de que el viejo continente está perdiendo cohesión y peso en el mundo, ante el ascenso de otras potencias. La sensación —así se puede leer en gran parte de la prensa alemana— es la de una crisis global de los valores y logros de occidente. Muchas gracias.